

Constancia secretarial: Al despacho del señor Juez hoy 22 de julio de 2022, con atento informe que HEIDY MARCELA GARCÍA elevó solicitud de redención de pena y concesión del subrogado penal de la Libertad condicional, acto realizado a través de la Oficina Jurídica del EPMSCRM Sogamoso el 06 de mayo de 2022. Para lo que se sirva proveer

SANDRA MILENA CORREDOR ALARCÓN.
Secretaria



DISTRITO JUDICIAL SANTA ROSA DE VITERBO
JUZGADO 1º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACÁ)
Correo institucional j01epmsrv@cendoj.ramajudicial.gov.co

Santa Rosa de Viterbo, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022)

C.U.I.	15861600000020190000200 (N.I. 2022-091)
TRÁMITE	LEY 906 DE 2004
SENTENCIADO	HEIDY MARCELA GARCÍA
JUZGADO	PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN CUNDINAMARCA
SENTENCIA	19 DE NOVIEMBRE DE 2019 ¹
DELITO	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
HECHOS	31 DE ENERO DE 2019 ²
PENA	36 MESES DE PRISIÓN
ACCESORIAS	INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS POR IGUAL LAPSO AL DE LA PENA DE PRISIÓN
MECANISMOS SUSTITUTIVOS	CONCEDIÓ LA PRISIÓN DOMICILIARIA
DECISIÓN	REDIME PENA CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL

1.-OBJETO:

Se ocupa el despacho de pronunciarse con relación a las solicitudes de redención de pena y libertad condicional elevada por la señora HEIDY MARCELA GARCÍA, allegándose respecto de la última, concepto favorable emitido por el Consejo de Disciplina del EPMSC de Sogamoso.

2.-FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y CONSIDERACIONES:

2.1.- COMPETENCIA: Es competente este Despacho para conocer de las presentes diligencias, en virtud de lo estipulado en el artículo 38 de la Ley 906 de 2004, en consonancia con el artículo 51 del Código Penitenciario y Carcelario, además de la atribución derivada de la competencia personal, por estar la sentenciada privada de la libertad en un Centro Penitenciario y Carcelario ubicado en este Distrito Judicial.

2.2.- DE LA REDENCIÓN DE PENA: De inicio, debe referirse que la rehabilitación y resocialización de los condenados son también funciones de la pena, para ello, el Legislador ha

¹ Folio 132 ss del c. De conocimiento

² Folio 132 reverso del C, de Conocimiento

previsto que la dedicación a realizar actividades de trabajo, estudio o enseñanza dentro de los penales, se deriven en el reconocimiento de redenciones de pena para quien las realiza, atendiendo las disposiciones que las regulan, consagradas en los artículos 82, 97 y 98 del Estatuto Penitenciario y Carcelario (*Ley 65 de 1993*), modificados por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014.

2.2.1.- PROBLEMA JURÍDICO: Se contrae en determinar si la privada de la libertad cumple los requisitos previstos en las normas antes indicadas, ello con el fin de otorgarle redención de pena.

2.2.2.- DEL CASO EN CONCRETO: Se tendrán en cuenta los certificados de cómputo y conductas allegados, acorde a la siguiente información:

CERTIFICADO	PERIODO	FOLIO	CONDUCTA	HORAS	E.P.C.
18370097	21/12/2021 a 31/12/2021	34 vuelto	Buena	54	Sogamoso
18467487	1/01/2022 a 31/03/2022	35	Buena	342	Sogamoso
TOTAL, HORAS REPORTADAS		396			
Art. 97, Ley 65 de 1993 (6 Horas = 1 Día)	2 días de estudio Redime 1 día de pena	Tiempo por redimir			
396 / 6 = 66 DIAS	66 / 2 = 33 DIAS	33 DIAS			

Luego de verificados los presupuestos de los art. 97 y 101 de la Ley 65 de 1993, se redimirá a la sentenciada HEIDY MARCELA GARCÍA por concepto de estudio treinta y tres (33) días, que equivalen a UN (1) MES Y TRES (3) DÍAS, los cuales se tendrán como parte de la pena purgada, conforme los certificados reportados.

2.3.- DEL SUBROGADO DE LIBERTAD CONDICIONAL: Procede el despacho a abordar el análisis de la solicitud de libertad condicional elevada por HEIDY MARCELA GARCÍA, para lo cual debe tenerse en cuenta que fue condenada por hechos ocurridos el 31 de enero de 2019; motivo por el cual, la petición debe verificarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal, modificado por el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, el cual a su vez fue modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 20 de enero de 2014, que consagra el subrogado de libertad condicional como sustituto de la prisión intramuros, señalando los presupuestos exigidos para su concesión de la siguiente manera:

“[A]rtículo 64. Libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

- 1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.*
- 2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena.*
- 3. Que demuestre arraigo familiar y social.*

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer, con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo.

En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia económica del condenado.

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como período de prueba, Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario.”

Al mismo tiempo, el artículo 471 de la Ley 906 de 2004, establece que el condenado que se hallare en estas circunstancias podrá solicitar al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad *“la libertad condicional acompañando la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal”*, es decir, el presupuesto subjetivo al que alude el numeral 2º *ibidem*.

En este orden de ideas, es del caso precisar que en la reforma introducida por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, si bien es cierto, se eliminó la valoración de la gravedad de la conducta punible como requisito para la concesión del subrogado de libertad condicional, se mantiene la previa valoración de la conducta punible como presupuesto para acceder a dicho mecanismo sustitutivo, valoración que sin lugar a dudas debe realizar el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en aras de determinar la procedencia del sustituto deprecado.

Sobre dicho particular, la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-757 del 15 de octubre de 2014, declaró la exequibilidad de la expresión *“previa valoración de la conducta punible”*, contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, en el entendido que las valoraciones de la conducta punible realizadas por los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para decidir sobre concesión de la libertad condicional de los condenados, debe tener en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el Juez que emitió la sentencia condenatoria, ya sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de dicho mecanismo sustitutivo.

De ahí que los jueces de ejecución de penas al momento de realizar la valoración de la conducta punible en los eventos en que conocen de las solicitudes de libertad condicional, deben atender a los lineamientos del principio del *non bis in ídem* y del criterio plasmado por el Juez de Conocimiento, y, paralelamente con la ejecución de la sanción penal, a efectos de verificar la necesidad de continuar o no ejecutando la condena, conforme el daño causado al bien jurídico tutelado y la afectación generada con ello a la sociedad.

En consonancia con lo precedente, la Corte Constitucional en sentencia T-640 del octubre 17 de 2017, reiteró los lineamientos conocidos en la sentencia C-757/14 y frente a la ejecución de las penas como una fase que cumple unos fines encaminados a la resocialización del condenado y a la prevención especial, consideró:

“(…) la ejecución de las penas que tiende a la resocialización del condenado, esto es, a su incorporación a la sociedad como sujeto capaz de respetar la ley. Por consiguiente, adquiere preponderancia la política penitenciaria ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y vigilada por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues es a este último en asociación con los conceptos que emita el INPEC, a quien le corresponde evaluar, según los parámetros fijados por el Legislador, si es posible que el condenado avance en el régimen progresivo y pueda acceder a medidas de privación de la libertad de menor contenido coercitivo (libertad condicional, prisión domiciliaria, vigilancia electrónica, entre otros subrogados penales), logrando la readaptación social del condenado (...).

En reciente pronunciamiento, la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la valoración de la conducta punible y al fin constitucional de la resocialización como garantía de la dignidad humana, refirió:

“...Bajo este respecto, esta Corporación ha considerado que no es procedente analizar la concesión de la libertad condicional a partir solo de la valoración de la conducta punible, en tanto la fase de ejecución de la pena debe ser examinada por los jueces ejecutores, en atención a que ese periodo debe guiarse por las ideas de resocialización y reinserción social, lo que de contera debe ser analizado. Así se indicó⁶.

i) No puede tenerse como razón suficiente para negar la libertad condicional la alusión a la lesividad de la conducta punible frente a los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, pues ello solo es compatible con prohibiciones expresas frente a ciertos delitos, como sucede con el artículo 68 A del Código Penal.

En este sentido, la valoración no puede hacerse, tampoco, con base en criterios morales para determinar la gravedad del delito, pues la explicación de las distintas pautas que informan las decisiones de los jueces no puede hallarse en las diferentes visiones de los valores morales, sino en los principios constitucionales;

ii) La alusión al bien jurídico afectado es solo una de las facetas de la conducta punible, como también lo son las circunstancias de mayor y de menor punibilidad, los agravantes y los atenuantes, entre otras. Por lo que el juez de ejecución de penas debe valorar, por igual, todas y cada una de éstas;

iii) Contemplada la conducta punible en su integridad, según lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria, éste es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecución de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues este dato debe armonizarse con el comportamiento del procesado en prisión y los demás elementos útiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecución de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participación del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptación social en el proceso de resocialización.

Por tanto, la sola alusión a una de las facetas de la conducta punible, esto es, en el caso concreto, solo al bien jurídico, no puede tenerse, bajo ninguna circunstancia, como motivación suficiente para negar la concesión del subrogado penal.

Esto, por supuesto, no significa que el juez de ejecución de penas no pueda referirse a la lesividad de la conducta punible para valorarla, sino que no puede quedarse allí. Debe, por el contrario, realizar el análisis completo.

iv) El cumplimiento de esta carga motivacional también es importante para garantizarla igualdad y la seguridad jurídica, pues supone la evaluación de cada situación en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecución de penas para cada condenado. (Resaltado fuera de texto)

2.3.1.- PROBLEMA JURÍDICO: Se contrae a determinar si la sentenciada HEIDY MARCELA GARCÍA reúne los presupuestos señalados en el artículo 64 del Código Penal, conforme a la interpretación que del mismo debe hacerse a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional C-757/14, para ser beneficiario de la libertad condicional.

2.3.2.- DEL CASO EN CONCRETO: Conforme lo peticionado, se allegó solicitud para la concesión de la libertad condicional invocada por sentenciada HEIDY MARCELA GARCÍA, quien fue condenando en vigencia del art. 64 de la Ley 599 de 2000 modificada por el art. 30 de la ley 1709 de 2014.

En tal sentido, se partirá del análisis del requisito objetivo del cumplimiento de las 3/5 partes de la pena, para continuar con el requisito subjetivo y la verificación de las demás exigencias establecidas en la norma.

a.- Así, al constatar el presupuesto objetivo, tenemos: Capturada 09/12/2019³

Hasta: **24 de agosto de 2022**

Privación física de la libertad: **TOTAL 32 meses y 16 días**

Redenciones de pena:

Fecha Auto	Fl. y Cdno.	Tiempo
22/07/2022	La presente providencia.	1 mes y 3 días
Total, redenciones:		1 mes y 3 días

³ Folios 2- 3 Cuaderno de Conocimiento.

Al sumar al tiempo privación física de libertad, las redenciones de pena otorgadas, arroja un descuento punitivo de **33 MESES y 19 DÍAS**.

Ahora, las tres quintas partes de la pena de 36 meses de prisión, corresponde a 21 meses y 18 días, en consecuencia, este Ejecutor advierte que la sentenciada HEIDY MARCELA GARCÍA a la fecha ha superado el *quantum* de pena necesario para tener derecho a la libertad condicional reclamada, teniéndose como cumplida esta exigencia.

b.- VALORACIÓN PREVIA DE LA CONDUCTA PUNIBLE EN CORRELACIÓN CON EL ADECUADO DESEMPEÑO Y COMPORTAMIENTO DURANTE EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN:

De acuerdo a las premisas normativas y jurisprudenciales antes descritas, debe señalarse que del análisis valorativo realizado por el Juez que emitió la sentencia condenatoria dentro del CUI 15861600000201900002, se resalta que la enjuiciada se allano a los cargos, frente a lo cual, el juzgador verificó que se respetaran los derechos legales y constitucionales de la encartada y que dicha manifestación correspondiera a un acto libre, consciente y espontáneo, además de que contara con asesoría de un defensor, requisitos que una vez cumplidos, generaron pleno convencimiento, más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de la hoy privada de la libertad.

"(...) se tiene que la acusada participó de manera dolosa y a de autor en la comisión de la conducta, pues fue quien concurrió a la conjugación del verbo rector de la figura típica infringida, lesionando de esa manera, el bien jurídico tutelado de la familia"

El anterior análisis de la valoración de la conducta punible, será contrastado con el comportamiento de la sentenciada HEIDY MARCELA GARCÍA en prisión domiciliaria e intramuros, para determinar si es necesario o no que continúe el tratamiento penitenciario, en consonancia con el numeral 2º del art. 64 del C.P., y, en ese sentido, al revisar la cartilla biográfica y las diferentes calificaciones de conducta, se denota que, durante el tiempo en reclusión la conducta ha sido evaluada como buena, igualmente, se evidencia que ha ejercido labores tendientes a redimir pena, las cuales han sido calificadas como sobresalientes, del mismo modo, al revisar el concepto emitido por el Consejo de Disciplina del EPMCS de Sogamoso se denota que, mediante Resolución No. 112 182 del 05 de abril de la presente anualidad⁹ se conceptuó favorablemente la concesión del subrogado deprecado por la interna, por lo que este ejecutor encuentra cumplida esta exigencia, lo anterior, sin perjuicio de la obligación de superar los demás presupuestos normativos.

c.- ARRAIGO SOCIAL Y FAMILIAR:

En cuanto al requisito previsto en el numeral 3 del artículo 64 del C.P., modificado por el artículo 5º de la Ley 890 de 2004, a su vez modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, se tiene que dentro del plenario, así como de la documentación allegada junto con la solicitud que acá se estudia, obran actuaciones que permiten afirmar que la señora HEIDY MARCELA GARCÍA demostró la existencia de su arraigo social y familiar en Ventaquemada Boyacá conjunto las manitas, torre 4 apartamento 502 junto a su progenitora BLANCA INÉS GARCÍA, identificada con CC No. 24.218.663 de Ventaquemada, y número de contacto telefónico 3143446041,⁴ el que al tenor de lo dispuesto en el artículo 312 del C.P.P. y como lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-1198 del 4 de diciembre de 2008, es determinado por el domicilio, asiento de la familia, de los negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país permanecer oculto. Asimismo, se verifica que el sentenciado no hace parte del grupo familiar de la víctima.

d.- PAGO DE LOS PERJUICIOS FIJADOS EN LA SENTENCIA:

Al respecto, de la revisión de las piezas procesales, no se evidencia que se presentara incidente de reparación de perjuicios.

⁴ Folios 30 reverso y 31 del C, de Ejecución.

e.- CONCLUSIÓN:

Bajo los anteriores razonamientos, es posible concluir que la sentenciada HEIDY MARCELA GARCÍA, tiene derecho a la concesión del subrogado de la libertad condicional.

Para gozar del mecanismo sustitutivo otorgado, se considera pertinente que el condenado preste caución prendaria en cuantía equivalente a uno PUNTO CINCO (1.5) S.M.L.M.V. EN PÓLIZA JUDICIAL O EN EFECTIVO mediante consignación en la cuenta de depósitos judiciales N° 156932037001 del Banco Agrario de Colombia de este Juzgado en caso de realizarse en efectivo, y, una vez prestada la caución prendaria, deberá suscribir diligencia de compromiso con las obligaciones contenidas en el artículo 65 del C.P., disponiendo un periodo de prueba de tres meses (3) y catorce (14) días.

3.- OTRAS DETERMINACIONES:

3.1. Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado dentro de la presente providencia, se hace necesario disponer que la libertad de la sentenciada se hará efectiva si en su contra no existen requerimientos por otra Autoridad Judicial.

3.2. La presente providencia será notificada de manera personal a la sentenciada HEIDY MARCELA GARCÍA, quien se encuentra privada de la libertad en el EPMSC de Sogamoso; se impone el pago o constitución de caución prendaria en la cuantía antes indicada y la suscripción de diligencia de compromiso con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el art. 65 del C.P. La boleta de libertad se libraré ante la Dirección del EPMSC de Sogamoso por parte de este Despacho. Se comisionará al Asesor Jurídico del citado Penal, para que por su intermedio notifique personalmente al sentenciado el auto en emisión; una vez se reciba en este Juzgado, el soporte de la caución exigida, y como parte de la comisión, se le remitirá la diligencia de compromiso para que, ante él, el recluso proceda a su respectiva suscripción; asimismo, se adjuntará la boleta de libertad pertinente.

3.3. Se solicitará al Asesor Comisionado que remita al correo electrónico institucional de este Juzgado, el despacho comisorio debidamente diligenciado.

3.4. Como quiera que desde la emisión de la sentencia de instancia el 19 de noviembre de 2019, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Villapinzón (Cundinamarca) se dispuso conceder el sustituto de la prisión domiciliaria a la señora HEIDY MARCELA GARCÍA, la cual cumpliría en el Conjunto Las Manitas, Torre 4, Apartamento 502 de Ventaquemada (Boyacá), inmueble que se referencia como arraigo al interior del presente asunto, en el cual se define la concesión de la libertad condicional de la sentenciada junto con la progenitora de la condenada, señora BLANCA INÉS GARCÍA, persona que se hizo cargo de los menores víctimas de la conducta punible, según acta suscrita por la Comisaría de Familia de Ventaquemada el 5 de febrero de 2015.

Como consecuencia de lo anterior, es claro que desde la emisión de la sentencia se dispuso que la señora HEIDY MARCELA GARCÍA conviviría con sus hijos en el inmueble de propiedad de la señora BLANCA INÉS GARCÍA, sin embargo, y, pese a que existe un proceso de resocialización al interior del EPC de Sogamoso exitoso y no existen glosas que indiquen nuevas agresiones hacia los menores, es del caso oficiar a la COMISARIA DE FAMILIA DE VENTAQUEMADA y al INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR con sede en dicho municipio o el Centro Zonal que haga presencia en el mismo, para que verifiquen las condiciones de los menores YMMG, JJMG y ESMG y se indague acerca de la convivencia de los mismos y su progenitora durante el tiempo que se mantuvo la prisión domiciliaria y en la actualidad con ocasión de la concesión de la libertad condicional.

En el mismo sentido, en la correspondiente diligencia de compromiso se adicionará otra obligación a las contempladas en el artículo 65 del Estatuto Represor, relativa a que la permanencia del presente subrogado, se mantendrá siempre y cuando se cumpla con **“Observar buena conducta, trato respetuoso y decoroso con los menores YMMG, JJMG**

y ESMG.”

3.5. En firme este proveído, ENVIAR el expediente por competencia personal al Juzgado 001 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja por conocimiento previo.

4.- DECISIÓN:

Conforme a lo considerado, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Rosa de Viterbo,

R E S U E L V E :

PRIMERO.- REDIMIR de la pena que descuenta la interna HEIDY MARCELA GARCÍA, un (1) mes y tres (3) días.

SEGUNDO.- CONCEDER el subrogado de libertad condicional en favor de la sentenciada HEIDY MARCELA GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.051.637 expedida en Bogotá D.C. Para tal fin, se DISPONE que la prenombrada preste caución prendaria en cuantía equivalente a UNO PUNTO CINCO (1.5) S.M.L.M.V. EN PÓLIZA JUDICIAL ó EN EFECTIVO mediante consignación en la cuenta de depósitos judiciales N° 156932037001 del Banco Agrario de Colombia de este Juzgado. Efectuado lo anterior, deberá remitir el respectivo soporte escaneado al correo electrónico institucional de este Juzgado j01epmsrv@cendoj.ramajudicial.gov.co; del mismo modo, en caso de consignarla en efectivo, deberá enviarla en físico a este Despacho a través de correo certificado a la carrera 5 N° 7-50, oficina 301, Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo coordinar con el Despacho para recibirla allí directamente.

TERCERO.- NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente providencia a la reclusa HEIDY MARCELA GARCÍA, quien se encuentra privado de la libertad en el EPMSC de Sogamoso, para tal fin, COMISIONAR al Asesor Jurídico del EPMSC de Sogamoso, solicitando al citado funcionario y previa remisión a este Juzgado del soporte documental del pago o constitución de la caución prendaria en cuantía de UNO PUNTO CINCO (1.5) S.M.L.M.V.) por el sentenciado CARLOS LEONARDO SIERRA PACHECO, hacer suscribir diligencia de compromiso al mismo con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 65 de la Ley 599 de 2000. Las actuaciones aludidas deberán ser devueltas por parte de la Oficina Jurídica a la mayor brevedad al correo electrónico institucional del Juzgado. La boleta de libertad y la diligencia compromisoria se librarán directamente desde este Despacho y se adjuntarán a la comisión, una vez se reciba el soporte del pago o constitución de la caución.

CUARTO.- OFICIAR a la COMISARIA DE FAMILIA DE VENTAQUEMADA y al INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR con sede en dicho municipio o el Centro Zonal que haga presencia en el mismo, para que verifiquen las condiciones de los menores YMMG, JJMG y ESMG y se indague acerca de la convivencia de los mismos y su progenitora durante el tiempo que se mantuvo la prisión domiciliaria y en la actualidad con ocasión de la concesión de la libertad condicional.

QUINTO.- ADICIONAR la correspondiente diligencia de compromiso, con la obligación relativa a **“Observar buena conducta, trato respetuoso y decoroso con los menores YMMG, JJMG y ESMG.”**

SEXTO.- ADVIERTASE que, la libertad condicionada acá dispuesta en favor de la sentenciada se hará efectiva si en su contra no existen requerimientos por otra Autoridad Judicial.

SÉPTIMO.- DAR cumplimiento al acápite de Otras Determinaciones

OCTAVO.- REMITIR copia de la presente decisión al EPMSC de Sogamoso a efectos de incorporarse a la hoja de vida del recluso.

NOVENO.- NOTIFICAR la presente determinación al Representante del Ministerio Público a través de correo electrónico.

DÉCIMO.- Contra la presente providencia proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación, los cuales deberán ser enviados al correo electrónico institucional de este Juzgado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



DIEGO ENRIQUE BENAVIDES HERNÁNDEZ
Juez